

## Justificante de firma de documento

Fecha de generación: 13/03/2015 10:44

Nombre del documento: Resolución 1286

### Relación de firmantes

Datos del firmante	Grafo de firma manual	Fecha de firma	Información de firma
ANGELINA TRIGO PORTELA		12/03/2015 05:42	Firma

Este documento es un justificante de firma que permite recuperar el archivo de firma digital original (el único con validez legal) introduciendo el código CSV ubicado en el margen izquierdo en la siguiente dirección: <https://sedempr.gob.es/es/sede/csv>



Con fecha 21 de febrero de 2015 tuvo entrada en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud de [REDACTED] que quedó registrada con el número 001286:

“Anteriormente presenté esta misma solicitud dirigida al Banco de España (nº expediente 1246) a través del Mº de Economía y fue remitida a la Casa de la Moneda, no permitiéndoles devolverla para enviarla al remitente adecuado. Es incorrecto. Deseo que estas preguntas SEAN REMITIDAS AL BANCO DE ESPAÑA, dado que en el formulario de solicitud no me permite hacerlo directamente. COPIA DE LA SOLICITUD 1246: ----- En relación a la creación de la nueva sociedad empresarial pública, dependiente del Banco de España, encargada de la impresión de billetes euro de la cuota española y como secretario de la sección sindical Espacio de Participación Sindical en la Casa de la Moneda (EPS-FNMT) y miembro del Comité de Empresa de la Casa de la Moneda, solicito respuestas a las siguientes cuestiones: 1.- ¿Por qué no se utiliza las posibilidades que se incluyen en la Directiva Europea 2014/24/UE, en sus artículos 11 y 12.4, manteniendo un modelo similar del que se ha venido utilizándose hasta ahora con muy buenos resultados? 2.- Existiendo diversas alternativas, ¿por qué se utiliza lo dispuesto en la Orientación ECB/2014/44 a sabiendas del perjuicio que va a generar en la Casa de la Moneda? ¿Se ha tenido en cuenta y se ha cuantificado la pérdida que va a suponer esta operación para el patrimonio nacional? 3.- ¿Disponen de informes de viabilidad de la nueva sociedad y de la hipotética Casa de la Moneda sin el departamento de impresión de billetes euro? 4.- Nos consta que a día de hoy no existen tales informes con un mínimamente detallados. ¿Es cierto que en caso que no fuera viable la nueva sociedad en 5-10 años se cerraría sin problemas a pesar de suponer de unos 200 millones de inversión de dinero público, como afirmó Javier Alonso (Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago) en una reunión con el Comité de Empresa de la Casa de la Moneda?”

Con fecha 12 de marzo de 2015 esta solicitud se recibió en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto para su resolución en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre.

De acuerdo con la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando estén dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

Una vez analizada la solicitud, la Directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, considera que la misma incurre en el expositivo precedente toda vez que la información que se solicita no se encuentra en la Administración General del Estado.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra d) del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se deniega el acceso a la información pública cuya solicitud ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución.

A juicio de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, es competente para conocer de la solicitud de acceso que se deniega mediante la presente resolución, el Banco de España, órgano al que deberá dirigirse el solicitante para recabar la información.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa) ,en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución.